

COP26: UN BREVE BALANCE

Gian Carlo Delgado Ramos¹

Ante el aumento de la temperatura promedio del planeta en alrededor de 1.1°C y la agudización esperada de los impactos del cambio climático con cada incremento adicional de la temperatura, la COP26 no logró traducir el tono de “emergencia” en la acción climática necesaria, particularmente para los próximos diez años que serán claves para efectivamente cambiar el curso en el que hoy día nos encontramos.

A pesar de la creciente acumulación de evidencia científica, la acción, financiamiento y construcción de capacidades siguen siendo limitados con respecto a la dimensión del problema, ello sobre todo en el Sur Global, pero no solamente. Lo dicho es doblemente cierto de cara a los impactos generados por la COVID-19, ya que muchos de los esfuerzos y recursos se han destinado a la emergencia sanitaria, lo cual no en pocas ocasiones ha entrado en conflicto con otras agendas como la climática.

La importante carga al presupuesto público, la desaceleración de la economía y la presión inflacionaria, son temas prioritarios en las agendas nacionales, lo cual ha potenciado posturas que priorizado lo económico por encima de lo medioambiental y climático. Ello a su vez, puede traducirse, como hasta ahora en general ha sido el caso, en estructuras de gasto público y estímulos que mayormente afianzan las prácticas habituales y el avance de infraestructura contaminante, en lugar de dar paso a medidas que fomenten cambios de paradigma. El argumento es que el crecimiento económico es urgente para evitar al máximo que más y más gente se encuentre en situación de pobreza, lo cual sería en cierto modo lógico si no fuera porque la acumulación de riqueza ha sido particularmente acelerada en los círculos de los más ricos durante los casi dos años de duración de la pandemia COVID-19.

¹Investigador titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Correo: giandelgado@unam.mx

La inercia imperante pone sin duda en entredicho el compromiso asumido por los países para fortalecer sus contribuciones determinadas para fines de 2022, momento en el que idealmente se esperaría que las acciones por el clima, la sostenibilidad y la resiliencia sean más ambiciosas y efectivas, al menos si es que se propone cumplir con la meta aspiracional de no sobrepasar un aumento en la temperatura promedio del planeta en entre 1.5°C y 2°C, rango en el que el valor menor reduciría significativamente los impactos y riesgos. Lo dicho se sostiene a pesar de que en la COP26 se reconocieran las responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Uno de los grandes retos que se subrayó en el marco de la COP26 es la necesidad de incentivar la acción multinivel, esto es, desde compromisos y acciones por parte de las naciones firmantes, como el involucramiento de actores no-estatales (según lo precisa la Alianza de Marrakech) y niveles subnacionales de gobierno donde destacan las ciudades en tanto que generan, directa e indirectamente, el grueso de emisiones de gases de efecto invernadero y porque son espacios clave para la acción. Así, de cara a la COP27 se esperaría un reforzamiento de la acción y colaboración de y entre las ciudades, una postura que ha sido fortalecida con la publicación de diversos reportes internacionales, tales como la *Agenda de Investigación y Acción sobre Cambio Climático y Ciudades, Mejorando las Contribuciones Nacionales Determinadas mediante la Acción Climática Urbana, Eficiencia energética y cambio climático*, y *GEO Ciudades*, así como por el empuje de reuniones para incentivar la acción urbana como lo fue Innovate4Cities, celebrada en octubre de 2021.

La insistencia en el papel de las ciudades desde la necesaria acción coordinada multinivel radica en que, a la fecha, sólo el 60% de los países reportaban haber impulsado de alguna forma la colaboración multinivel, incluyendo puntualmente la escala urbana, como mecanismo para incrementar el nivel de ambición de las acciones propuestas en la segunda ronda de Contribuciones Nacionales Determinadas (como se dijo, programada para el cierre de 2022). Si bien lo reportado es un avance, también es cierto que es insuficiente, no sólo por la ausencia de tales consideraciones en una buena parte de países firmantes del Acuerdo de París, sino también porque en general aún no se logra la articulación de medidas cualitativamente robustas cuyo impacto se traduzca en el avance de la adaptación y mitigación del cambio climático (lo cual es todo un reto dado que los compromisos internacionales siguen siendo voluntarios y no vinculantes).

Para el avance de la acción climática no basta pues con la declaración de intenciones, de ahí que se reafirme desde la COP26 la urgencia de acciones concretas (pero voluntarias), tales como el fortalecimiento y la transparencia del financiamiento. En un tenor similar se ha hecho el llamado para impulsar la transferencia de tecnologías, fortalecer las capacidades locales, e implementar mecanismos para reducir pérdidas y daños, sobre todo en los países más vulnerables a los impactos del cambio climático. Este último punto, sin embargo, no alcanzó un acuerdo en términos de los mecanismos puntuales para su financiamiento e implementación. Aún más, sigue sin estar claro cómo hacer llegar de la mejor manera los recursos necesarios para impulsar iniciativas locales, particularmente en los países más pobres del Sur Global que, por si fuera poco, están experimentando los mayores ritmos de crecimiento poblacional y espacio urbanizado, de pérdida de biodiversidad y de efectos indeseables derivados tanto del cambio climático, como de la pandemia COVID-19. Por ello, el avance hacia una agenda climática-ambiental más robusta inevitablemente pasará por reconocer y atender la pobreza, la informalidad y la desigualdad desde nociones de justicia, equidad e inclusión social, lo cual es al día hoy una gran deuda histórica, tanto de la política internacional como la del grueso de naciones (lo cual incluye lo climático y se extiende a otros ámbitos como la distribución asimétrica de las vacunas COVID-19).

Además de las medidas de adaptación y mitigación, algunas de las cuales implicarían trastocar los intereses de las carboneras y petroleras si se apostará por una efectiva transición hacia energías renovables (de notarse es que el acuerdo de la COP26 diluyó tal posibilidad al cambiar “descontinuar” por “disminuir” el uso del carbón), desde la COP26 se apuesta por acelerar el desarrollo sostenible y erradicar la pobreza, aspiraciones alineadas a los ODS que, para efectivamente alcanzarse, supondrían trastocar la lógica estructural del sistema actual de producción, particularmente en lo que respecta a la priorización de la producción creciente de riqueza y los cotos de poder e interés creados que habilitan su distribución desigual. Asimismo, el avance del imaginario del desarrollo sostenible, por lo menos desde una visión de sostenibilidad fuerte, supondría trascender la noción de un crecimiento económico al infinito en un planeta finito; pero las resistencias son fuertes. En el pacto climático de Glasgow, en su inciso 54, denota en tal sentido la insistencia de perseguir el crecimiento económico como vía para el desarrollo, una noción que desde Bruntland no ha resuelto el problema sino todo lo contrario debido a la histórica correlación entre crecimiento económico y consumo de recursos.

Una apuesta por una transformación a fondo de las formas en las que como seres humanos nos relacionamos con la naturaleza, en tanto parte intrínseca de ella, supondría apostar por formas moderadas de consumo de la mano de potentes esquemas de eficiencia y circularidad que no se pueden aprovechar del todo si no se vinculan a la gestión integral de los territorios. Con la reducción del consumo de recursos y la generación de residuos, de la mano de una mejor distribución de la riqueza, es posible potenciar las capacidades de todos los seres humanos para florecer, para la buena vida, sin transgredir las fronteras ecológicas planetarias y, por tanto, sin violentar el derecho de otras formas de vida de coexistir en armonía.

La reconsideración, no-antropocéntrica, de los usos del suelo y el ordenamiento territorial, así como de las formas de producción, distribución y consumo es por demás urgente, de manera tal que se puedan (re)orientar hacia nuevas finalidades: en esencia la vida. En tal ejercicio, los actores sociales de base son fundamentales para el avance de propuestas y acciones histórica, cultural, y socioterritorialmente situadas por lo que el reto está en cómo poner en práctica fórmulas para que los jóvenes, indígenas y comunidades locales –que son reconocidas en el documento final de la COP26–, y en sí todos y cada uno de los seres humanos, efectivamente se empoderen, participen y (co)construyan diagnósticos y soluciones.

Ello es importante debido a que la actuación de los tomadores de decisiones y de los expertos es insuficiente, notoriamente lenta, y en ocasiones desalineada al cambio de paradigma que demanda la genuina solución del problema. Y es que, si se cumplieran todas las metas aspiracionales propuestas para el año 2030, incluyendo las acciones en reforestación y reducción de emisiones de metano formuladas en la COP26, la temperatura promedio del planeta bien podría alcanzar 2.4°C, lo cual sería indeseable y riesgoso. Como lo ha señalado correctamente Niklas Hoehne, “...lo alcanzado en la COP26 reduce la brecha, pero no resuelve el problema”.

Por todo lo antes dicho, es cada vez más prudente que los llamados de científicos parte de Rebelión Científica –entre muchos otros–, de los jóvenes por el clima, y demás actores sociales con posturas críticas, demanden de nuestra más seria consideración al reflexionar cómo transformar la forma en la que hasta ahora se han hecho las cosas, esto es, para dar paso a una “revolución climática” desde la

cual podamos “cambiar el sistema y no el clima”. Lo que desde México hagamos o dejemos de hacer contribuirá en hacer historia, para bien o para mal. Esperemos que en efecto sea lo primero.